Expediente N° 500013153001 2020 00168 00

JUZGADO PRIMERO CIVIL DEL CIRCUITO

Villavicencio, veintidós (22) de agosto de dos mil veintitrés (2023)

Se procede a dictar sentencia anticipada dentro del proceso de expropiación de la referencia, al tenor de lo dispuesto por el numeral 2º del artículo 278 del C.G.P., puesto que no hay pruebas que practicar, teniendo en cuenta que el extremo demandado no estuvo en desacuerdo con el avalúo allegado por la Agencia Nacional de Infraestructura – ANI, que tasó la indemnización de perjuicios a su favor.

ANTECEDENTES

1. La demanda fue presentada por la ANI el 5 de octubre de 2020 [archivo digital 02], y a través de aquella pretende que se declare en su favor la expropiación de una zona de terreno, "...MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS PUNTO NOVENTA Y NUEVE METROS CUADRADOS (1.692,99 M2). a segregarse de un predio en mayor extensión denominado ETEMENANKI, ubicado en la vereda Japón (según FMI, títulos), Japón — Europa (norma uso de suelo) del Municipio de Paratebuena, Departamento de Cundinamarca., identificado con número predial 25530-00-03.00-00-0001-0003-0-00-00-0000 y número predial anterior 25530-00.03-0001-0003-000 según el certificado catastral, y folio de matrícula inmobiliaria No. 160-8056, de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Gacheta", lo anterior tal como quedó expresamente señalado en el numeral primero del acápite de pretensiones del libelo introductorio, por lo que ofertó reconocer la suma de \$5.775.777, como avalúo del área expropiada.

2. La demanda se admitió por auto de 21 de mayo de 2021 (archivo digital 16), únicamente en contra de Acción Fiduciaria S.A. como vocera y representante del Fideicomiso Garantía Agrored, quien contestó la demanda oportunamente el 13 de octubre de 2020 (archivo digital 29),

y manifestó que no le asiste interés alguno, «en consecuencia no existe lugar a oponerme a la prosperidad de todas las pretensiones puestas en contra del patrimonio», toda vez que mediante la Escritura Pública N° 2022 del 27 de septiembre de 2018, otorgada en la Notaria 56 de Bogotá D.C., se transfirió el inmueble objeto de la Litis a José Matíws Cordero Pérez, documento público que aún no ha sido inscrito en el folio de matrícula inmobiliaria pertinente.

Como consecuencia de lo anterior, en el citado proveído el Juzgado, bajo el amparo del artículo 67 del C.G.P., ordenó vincular a este trámite judicial a José Matíws Cordero Pérez al presente proceso.

3. El vinculado José Matíws Cordero Pérez, pese haberse notificado personalmente en los términos del artículo 8 del Decreto 806 de 2020, desde el pasado 7 de diciembre de 2022 (archivo digital 46), no contestó ni emitió pronunciamiento alguno frente a la acción de la referencia, tal como se dijo en auto de 10 de marzo de 2023 (archivo digital 46).

4. Agotado el ritual procesal pertinente, puesto que el extremo demandado no se opuso a las pretensiones de la demanda y no hay pruebas por practicar, en la presente oportunidad se procederá a resolver de fondo el presente asunto a través de sentencia anticipada, previas las siguientes,

CONSIDERACIONES

En principio debe mencionarse que de antaño se ha reconocido que la propiedad tiene un carácter relativo, pues aun cuando *“se garantizan la propiedad privada y los demás derechos adquiridos con arreglo a las leyes civiles, los cuales no pueden ser desconocidos ni vulnerados por leyes posteriores”*, es claro que *“por motivos de utilidad pública o interés social definidos por el legislador, podrá haber expropiación mediante sentencia judicial e indemnización previa”*, según lo consagra el artículo 58 de la Constitución Política, cuyos bienes se destinarán, entre otros, a la ejecución de programas y proyectos de infraestructura vial y de

sistemas de transporte masivo, tal como lo establece el canon 19 de la Ley 1682 de 2013 y el artículo 10 de la Ley 9ª de 1989.

Precisamente, la Corte Constitucional ha definido la expropiación como *"un medio o instrumento del cual dispone el Estado para incorporar al dominio público los bienes de los particulares, previo el pago de una indemnización, cuando éstos se requieran para atender o satisfacer necesidades de 'utilidad pública e interés social', reconocidas o definidas por la ley, con intervención de la autoridad judicial (expropiación por vía judicial) o mediante la utilización de los poderes públicos propios del régimen administrativo (expropiación por vía administrativa)"*¹.

Ahora, sabido es que para el buen suceso de la expropiación por vía judicial, cuyo trámite se encuentra regulado en el artículo 399 del Código General del Proceso, debe acreditar la entidad demandante las facultades expresas que le asisten para desarrollar alguna de las actividades que la ley consagra como de interés general o utilidad pública y que la expropiación resulte necesaria para satisfacer tales intereses, a través de un acto administrativo que así lo disponga, sin que pueda perderse de vista el perentorio término de tres meses que fijó la ley procesal para instaurar la correspondiente demanda, a la que deberá incorporarse el certificado acerca de la propiedad del bien a expropiar y de los derechos reales constituidos sobre el mismo, por un periodo de diez años, si fuere posible, cuando se trate de bienes sujetos a registro y el avalúo de la fracción de terreno objeto de expropiación.

Descendiendo al caso concreto, se advierte fácilmente que los referidos presupuestos se cumplen a cabalidad, pues la Resolución N° 850 de 19 de junio de 2020 (fs. 137-141, archivo digital 01), mediante la cual se ordenó la expropiación o se dispuso el inicio del trámite de expropiación judicial, quedó ejecutoriada a partir del 14 de julio de 2020, según lo certifica la constancia

¹ CORTE CONSTITUCIONAL, Sentencia C-153 de 1994.

visible a folio 151 del expediente (pg. 152, archivo digital 01), lo que dicho sea de paso fijaba el 14 de octubre de 2020, como término máximo para que operara el fenómeno de la caducidad de la acción prevista en el numeral 2º del artículo 399 del Código General del Proceso, que en el caso concreto no alcanzó a configurarse, si se tiene en cuenta que la demanda fue presentada el 5 de octubre de 2020, según lo acredita el acta de reparto visible en archivo digital 02 del expediente digital de la referencia.

Aunado a lo anterior, es claro que la Agencia Nacional de Infraestructura es una Agencia Estatal de naturaleza especial, del sector descentralizado de la Rama Ejecutiva del orden nacional, adscrita al Ministerio de Transporte, que tiene como objeto *"planear, coordinar, estructuras, contratar, ejecutar, administrar y evaluar proyectos de concesiones y otras formas de asociación público probada para el diseño, construcción, mantenimiento, operación, administración y/o explotación de la infraestructura pública de transporte en todos sus modos y de los servicios públicos conexos o relacionados y el desarrollo de proyectos de asociación público privada para otro tipo de infraestructura pública..."*, según lo dispone la Resolución No. 4165 de 3 de noviembre de 2011, lo que legitima su actuar en este proceso, en los términos del artículo 11 de la Ley 9ª de 1989.

Así mismo, está demostrada la legitimación en la causa por pasiva, pues si bien en principio se demandó a Acción Fiduciaria S.A. como vocera y representante del Fideicomiso Garantía Agrored, como propietaria inscrita del inmueble objeto de litigio, tal como consta en la anotación n°3 del certificado de libertad y tradición del predio con matrícula inmobiliaria 160-8056, lo cierto es que al contestar la demanda dicho ente informó que no tiene interés alguno en el presente litigio, indicando que no le asiste mérito para oponerse a las pretensiones, pues mediante *"Escritura Pública N° 2022 del 27 de septiembre de 2018, otorgada en la Notaria 56 de Bogotá D.C., el patrimonio autónomo denominado FIDEICOMISO EN GARANTIA AGRORED, identificado con Nit. 805.012.921-0 trasfirió al señor JOSE MATIWS CORDERO PÉREZ identificado con Cedula de Ciudadanía N° 1.010.210.497 expedida en Bogotá D.C. el*

inmueble con folio de Matrícula N° 160-8056, objeto del presente proceso (pg. 4, archivo digital 25), sin que el mencionado documento público fuera inscrito; empero, junto con la contestación de la demanda aportó la Escritura Pública N° 2022 de 27 de septiembre de 2018, donde consta la transferencia de dominio del bien objeto de litigio a favor de JOSE MATIWS CORDERO PÉREZ.

Como consecuencia de lo anterior, a través de auto de 3 de diciembre de 2021, se ordenó la vinculación del señor José Matiws Cordero Pérez (en calidad de beneficiario o comprador del bien objeto de la *Litis*), quien, como ya se dijo, pese a haber quedado notificado personalmente de la presente acción en los términos del artículo 8 del Decreto 806 de 2020, desde el pasado 7 de diciembre de 2022 (archivo digital 46), no contestó ni emitió pronunciamiento alguno frente a la demanda de expropiación.

En este punto es pertinente aclarar que la vinculación de quien no tiene el dominio completo del inmueble, pues tiene solo el título, pero no el modo, esto es, del señor Cordero Pérez, se efectúa con fundamento en lo dispuesto en el numeral 1° del artículo 399 del C.G.P., que a la letra prevé “[l]a demanda se dirigirá contra los titulares de derechos reales principales sobre los bienes y, si estos se encuentran en litigio, también contra todas las partes del respectivo proceso (...)”, en armonía con el numeral 11° de la citada norma que dispone “[c]uando en el acto de la diligencia de entrega se oponga un tercero que alegue posesión material o derecho de retención sobre la cosa expropiada, la entrega se efectuará, pero se advertirá al opositor que dentro de los diez (10) días siguientes a la terminación de la diligencia podrá promover incidente para que se le reconozca su derecho. Si el incidente se resuelve a favor del opositor, en el auto que lo decida se ordenará un avalúo para establecer la indemnización que le corresponde, la que se le pagará de la suma consignada por el demandante. El auto que resuelve el incidente será apelable en el efecto diferido”.

Y es que, si bien en el *sub judice* el vinculado no se opuso a la diligencia de entrega anticipada,

sin que aun se realice la entrega definitiva del bien cuya expropiación se pretende, no se puede desconocer los derechos que le asisten al nuevo adquirente y poseedor del inmueble, máxime cuando así lo reconoció el propietario inscrito del predio que aquí fue demandado, esto es, Acción Fiduciaria S.A. como vocera y representante del Fideicomiso Garantía Agrored, al pronunciarse frente al libelo de la referencia, indicando que no le asiste interés alguno en el presente litigio, sin que haya lugar a que se oponga a las pretensiones pues el derecho sobre el bien en la actualidad recae en favor del señor José Matus Cordero Pérez (en calidad de beneficiario o comprador del bien objeto de la *Litis*), teniendo en cuenta la Escritura Pública N° 2022 de 27 de septiembre de 2018, allegada junto con la contestación de la demanda.

Por otro lado, junto con el libelo introductorio, la Agencia Nacional de Infraestructura aportó copia de la Resolución N° 850 de 19 de junio de 2020 (fs. 137-141, archivo digital 01), en virtud de tal acto administrativo, se catalogó el inmueble objeto del proceso como de utilidad pública o de interés social y se dio paso al trámite judicial de expropiación, ante la imposibilidad de efectuar la negociación voluntaria, describiendo el inmueble por su nombre, ubicación, medidas, linderos y características; las condiciones y la cuantía de la oferta para la enajenación voluntaria que se hizo formalmente; además, se precisó que el motivo de utilidad pública o interés social corresponde al proyecto vial "CORREDOR VIAL VILLAVICENCIO - YOPAL". Destinación que sin duda alguna se encuentra *previamente definido o declarado* por la Ley, particularmente en el artículo 19 de la Ley 1682 de 2013, el cual define "*como un motivo de utilidad pública e interés social la ejecución y/o desarrollo de proyectos de infraestructura del transporte a los que se refiere esta ley, así como el desarrollo de las actividades relacionadas con su construcción, mantenimiento, rehabilitación o mejora, quedando autorizada la expropiación administrativa o judicial de los bienes e inmuebles urbanos y rurales que se requieran para tal fin, de conformidad con el artículo 58 de la Constitución Política*".

Por último, es de anotar que, con la demanda, se allegó, entre otros, el plano de afectación predial [pg. 20, archivo digital 01] y el avalúo catastral de la totalidad del inmueble y el avalúo del área

afectada por la imposición de la servidumbre en una suma de \$5.775.777 [pg. 65-99, archivo digital 01], todos ellos documentos que permiten inferir el cumplimiento de los trámites necesarios para la declaratoria del bien como de utilidad pública o interés social y su adquisición para *“la ejecución del proyecto CORREDOR VIAL VILLAVICENCIO-YOPAL”*.

Ahora, en lo que respecta al valor de la indemnización por la expropiación de la fracción de terreno del predio con matrícula inmobiliaria 160-8056, es de indicar que la parte demandada, esto es, Acción Fiduciaria S.A. como vocera y representante del Fideicomiso Garantía Agrored, como propietario inscrito del inmueble, ni el vinculado José Matíws Cordero Pérez, (en calidad de beneficiario o comprador del bien objeto de la *Litis*), teniendo en cuenta la Escritura Pública N° 2022 de 27 de septiembre de 2018 allegada junto con la contestación de la demanda por parte de Acción Fiduciaria S.A., no se opusieron al avalúo e indemnización de perjuicios por la expropiación señalada en el dictamen allegado junto con el libelo; la cual se tasó en la suma de \$5.775.777, indemnización que incluye el monto de \$588.456, por concepto de cultivos y especies que se verían afectadas al encontrarse en el área objeto de expropiación, más la suma de \$5.187.321,36, correspondiente al valor total del área de terreno afectada. En la mencionada experticia se concluyó que *“[e]l predio cuenta con una extensión superficial bastante considerable, sobre la cual se va a adquirir una franja de terreno que no afecta su desarrollabilidad”*.

En ese orden, se aprobará el único dictamen pericial que obra en el expediente, esto es, el allegado por el extremo actor y se tendrá el valor indicado en el mismo como el pertinente para reconocer al demandado José Matíws Cordero Pérez, por concepto de indemnización por la expropiación de la fracción de terreno del predio con matrícula inmobiliaria 160-8056, teniendo en cuenta que la mencionada experticia fue presentada y rubricada por tres evaluadores idóneos, inscritos ante el Registro Abierto de Avaluadores y miembros de 1a Lonja Colombiana de Propiedad Raíz, esto es, por los señores Gabriel Sarmiento Arango RAA N° AVAL 19163731, Héctor Barahona Guerrero RAA N° AVAL 19114869 y por Tulio Hernán Rodríguez,

RAA AVAL N° 79057452, siendo el mencionado registro la prueba indiscutible de su calidad de evaluadores, tal como lo dispone el literal "C", del artículo 3 de la Ley 1673 de 2013, en el cual se define al evaluador como aquella "[p]ersona natural, que posee la formación debidamente reconocida para llevar a cabo la valuación de un tipo de bienes y que se encuentra inscrita ante el Registro Abierto de Evaluadores".

Igualmente, la citada ley enseña que el evaluador inscrito ante el Registro Abierto de Evaluadores podrá ejercer su actividad en todo el territorio nacional y que la falta de inscripción en el mismo genera un ejercicio ilegal de la actividad del profesional en dicho campo (arts. 7 y 10 Ley 1673 de 2013).

Sumado a ello, debe resaltarse que en el dictamen pericial allegado la ANI se explicó concreta y fundamentadamente que el valor obtenido como avalúo comercial de la franja de terreno objeto de expropiación se dio de aplicar el *método de comparación o de mercado*, enseñado en el artículo 1º de la Resolución No. 620 del 23 de septiembre de 2008 expedida por el IGAC, mediante la cual se regulan los procedimientos para la expedición de avalúos, pues en el contenido del dictamen pericial se expuso a través de tablas comparativas, ofertas y transacciones que se han llevado a cabo sobre predios con características similares al que es objeto de este litigio, clasificándolas e interpretándolas, para finalmente realizar un cálculo fundado del valor del terreno en la suma de \$40.000.000 por hectárea, valor que multiplicado por el área de terreno requerida arroja la suma total de **\$5.187.321,36**.

Por otro lado, para determinar el valor de los cultivos y especies que se encuentran dentro de la franja de terreno objeto de expropiación, cuyas fotografías hacen parte integral de la experticia, se acudió a los precios de estos en el mercado, siendo la fuente base el "Vivero Tierra Negra Tel 4440855", señalándose detalladamente en la experticia que en el predio había presencia de "guayaba, plátano, melina, palma de aceite, chizo sabanero, yarumo y cedro".

concluyendo como valor total por concepto de los mencionados cultivos y especies existentes, la suma total de \$588.456.

Así las cosas, fácil se concluye que el dictamen pericial aportado por el demandante por la suma total de \$5.775.777, por concepto de avalúo del terreno cuya expropiación se pretende, así como de los cultivos y especies de este que se van a ver afectados, se encuentra debidamente fundado y acorde con la Resolución No. 620 del 23 de septiembre de 2008 expedida por el IGAC, razones que le permiten al Despacho acoger las conclusiones allí desplegadas.

Estructurados de esta forma los presupuestos sustanciales y procesales para la procedencia de la expropiación invocada, se accederá a las pretensiones de la demanda y en consecuencia se ordenará la cancelación de los gravámenes, embargos e inscripciones que recayeren sobre el área de terreno del inmueble en litigio que será objeto de expropiación; sin embargo, no hay lugar a decretar la entrega del inmueble, toda vez que esta ya se efectuó en forma anticipada por comisionado el pasado 18 de mayo de 2022, según lo acredita el acta visible en archivo digital 39, entrega que para cualquier efecto se tendrá como definitiva.

En mérito de lo expuesto, el Juzgado Primero Civil del Circuito de Villavicencio, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

RESUELVE:

PRIMERO. DECRETAR a favor de la **AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA - ANI**, por motivos de utilidad pública o de interés social, de conformidad con lo expuesto en las motivaciones de esta sentencia, la expropiación de la franja de terreno de **"MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS PUNTO NOVENTA Y NUEVE METROS CUADRADOS (1.692,99 M2)** a **segregar de un predio en mayor extensión denominado ETEMENANKI, ubicado en la vereda Japón (según FMI, títulos), Japón — Europa (norma uso de suelo) del Municipio de**

Paratebueno, Departamento de Cundinamarca., identificado con número predial 25530-00-03.00-00-0001-0003-0-00-00-0000 y número predial anterior 25530-00.03-0001-0003-000 según el certificado catastral, y folio de matrícula inmobiliaria No. 160-8056, de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Gácheta", el anterior área objeto de expropiación se divide en dos zonas de terreno, cuyo linderos quedaron identificados en la diligencia de entrega anticipada de la siguiente manera:

Primer Área

Se ubica el equipo de georeferenciación en un punto de partida referencia inicial del predio solicitado identificado dentro del rituario con la FICHA PREDIAL CVY-02-111A, del 21 de agosto de 2018, elaborada por la CONCESIONARIA VIAL DEL ORIENTE S.A.S., con un área de terreno requerida de 51.77 metros cuadrados, que se encuentra debidamente delimitado dentro dos abscisas, Inicial KM 54+526,07, Final KIVI 54+555,45, predio rural denominado ETEMENANKI ubicado en la Vereda JAPON Municipio de Paratebueno Cundinamarca, número predial anterior 25530-00-03-0001-0003-0000, número predial actual 25530-00-03-00-00-0001-0003-0-00-00-0000, y folio de matrícula inmobiliaria número 160-8056 del ORIP de Gácheta Cundinamarca, cuyos linderos corresponde a: NORTE: en longitud de 31.12 mts, del PUNTO CUATRO al PUNTO SEIS con area sobrante del predio ETEMENANKL SUR: en longitud de 30.67 mts, del PUNTO UNO al PUNTO CUATRO con via nacional 6510 Villavicencio Yopal y vía departamental que conduce a Medina Cundinamarca. ORIENTE: en longitud de 0.00 mts. OCCIDENTE: en longitud de 2.26 mts, del PUNTO SEIS al PUNTO UNO con el predio TEOTIHUACAN; esa es la primera franja de terreno a entregar anticipadamente por motivos de utilidad pública y como consecuencia se procede hacer las respectivas mediciones con el equipo tecnológico de topografía que ha puesto a disposición la ANI, de donde se toma la información por coordenadas.

Siendo las 09:10 AM, se inicia por el punto de referencia, PUNTO SEIS de partida georeferenciado como en X 1086771.27 Y 977362.70, y de aquí a una distancia aproximada de 32.00 metros al PUNTO CUATRO en LINEA RECTA FINAL DE CIERRE DE LA FRANJA REQUERIDA; Datos anteriores tomados de la información suministrada por la ANI durante el recorrido.

Segunda Área

Se ubica el equipo de georeferenciación en un punto de partida referencia inicial del predio solicitado identificado dentro del rituario con la FICHA PREDIAL CVY-02-111A, del 21 de agosto de 2018, elaborada por la CONCESIONARIA VIAL DEL ORIENTE S.A.S., con un área de terreno requerida de 1.641.22 metros cuadrados, que se encuentra debidamente delimitado dentro dos abscisas, Inicial KM 54+529,62, Final KM 54+900,18, predio rural

denominado ETEMENANKI ubicado en la Vereda JAPON Municipio de Paratebuena Cundinamarca, número predial anterior 25530-00-03-0001-0003-0000, número predial actual 25530-00-03-00-00-0001-0003-0-00-00-0000, y folio de matrícula inmobiliaria número 160-8056 del ORIP de Gacheta Cundinamarca, cuyos linderos corresponde a: NORTE: en longitud de 375.32 mts, del PUNTO CATORCE al PUNTO VEINTICINCO con área sobrante del predio ETEMENANKI, al medio vía departamental que conduce a Medina Cundinamarca. SUR: en longitud de 371.57 mts, del PUNTO SIETE al PUNTO TRECE con vía nacional 6510 Villavicencio Yopal. ORIENTE: en longitud de 2.82 mts, del PUNTO TRECE al PUNTO CATORCE, con el Rio Humea. OCCIDENTE: en longitud de 2.92 mts, del PUNTO VEINTICINCO al PUNTO SIETE con vía nacional 6510 Villavicencio Yopal y vía departamental que conduce a Medina Cundinamarca; esa es la segunda franja de terreno a entregar anticipadamente por motivos de utilidad pública y como consecuencia se procede hacer las respectivas mediciones con el equipo tecnológico de topografía que ha puesto a disposición la ANI, de donde se toma la información por coordenadas.

Se inicia por el punto de referencia de partida, PUNTO VEINTICUATRO georreferenciado como en X:1086849.23 Y 977382.66 y de aquí al PUNTO CATORCE el LINEA RECTA FINAL DE CIERRE DE LA FRANJA REQUERIDA, georreferenciado con X 1087143.510 y 977421.33, del cual, desde el PUNTO QUINCE al PUNTO VEINTICATRO, se encuentra una corona de talud ya construida que hace parte de la malla vial en concesión; datos anteriores tomados de la información suministrada por la ANI durante el recorrido.

SEGUNDO. ORDENAR la cancelación de todos los gravámenes, embargos e inscripciones que recaigan sobre la franja de terreno objeto de expropiación que forma parte del inmueble con folio de matrícula 160-8056, que continuará sin alteración alguna. Librense las comunicaciones pertinentes al señor Registrador de Instrumentos Públicos de Gacheta (Cundinamarca).

TERCERO. ORDENAR el registro de esta sentencia en el folio de matrícula 160-8056, para lo cual se ordena la expedición de las copias de las actuaciones respectivas, incluida la diligencia de entrega anticipada realizada el pasado 18 de mayo de 2022, cuya acta hace parte integral de esta sentencia:

CUARTO. ORDENAR el levantamiento de las medidas cautelares decretadas en este proceso. Por Secretaría procédase de conformidad.

QUINTO. RECONOCER a favor del demandado José Matus Cordero Pérez (en calidad de comprador y poseedor del bien objeto de la *Litis*), la suma de **\$5.775.777**, correspondiente al estimativo de la indemnización por la expropiación ordenada, conforme con el avalúo aportado por el demandante.

Por secretaria, expídase el respectivo título de depósito judicial a órdenes del poseedor José Matus Cordero Pérez, previa verificación del embargo de créditos; se advierte que los dineros no podrán ser entregados al demandado sino una vez "*[r]egistradas la sentencia y el acta, se entregará a los interesados su respectiva indemnización, pero si los bienes estaban gravados con prenda o hipoteca el precio quedará a órdenes del juzgado para que sobre él puedan los acreedores ejercer sus respectivos derechos en proceso separado. En este caso las obligaciones garantizadas se considerarán exigibles, aunque no sean de plazo vencido (...)*", tal como lo señala el artículo 399 del C.G.P.

SEXTO. Sin condena en costas por no aparecer causadas.

Notifíquese

GABRIEL MAURICIO REY AMAYA
JUEZ

JUZGADO PRIMERO CIVIL DEL CIRCUITO DE VILLAVICENCIO
Hoy 23 de agosto de 2023 se notifica a las partes el AUTO anterior por anotación en ESTADO.
PAOLA CAGUA REINA SECRETARIA